

Tres tintos por buena información



JORGE HEILI
Gerente de Estrategia Digital - Medios OAL

¿Usted estaría dispuesto a pagar por acceder a buena información? Con el acceso a internet se acostumbó a leer noticias gratis, a acceder a videos, a escuchar la radio por streaming, a disfrutar de buenos podcasts sin más costo que la tarifa de datos que paga en su teléfono y el servicio de Internet de su casa.

En nuestra región latinoamericana, el hábito de pagar por información no se ha popularizado todavía. Un estudio de *Reuters Institute* mostró que en países como Argentina o España solo 12% de los consultados reconoció haber pagado alguna suscripción de información. En los EE.UU. es 20% y en Noruega, 42% de los consumidores ha pagado por acceder a noticias.

Pagar por buena información empieza a verse como una posibilidad mucho más cercana. Días pasados, el diario español *El Mundo* celebraba las 50.000 suscripciones de pago digital, mientras *El País* ha sumado 64.000 en los últimos meses. Este logro anhelado desde hace años por los periódicos, se debe en gran medida a la llegada de servicios de entretenimiento como *Netflix* o los videojuegos, que impusieron el concepto de hacer pagos que se perciban como “baratos”. Piense que un abono de televisión por cable ronda los US\$25 mensuales, mientras que *Netflix* por US\$7 permite su uso cuando quiera, en su TV, su computadora o su celular.

CON EL ACCESO A INTERNET SE ACOSTUMBRÓ A LEER NOTICIAS GRATIS

Producir información es muy costoso. En este momento, las empresas periodísticas de Colombia se encuentran bajo una enorme presión por la caída de ingresos publicitarios mientras se sostienen los costos de tener redacciones que producen noticias, entrevistas y reportajes que se publican en radio, TV, web, redes sociales, que el usuario consume pagando por su servicio de datos a la empresa telefónica, pero al medio que produce y publica no llega un peso.

Mientras, el “sentimiento popular” dice que “no cree en las noticias”; las redes sociales se han convertido en vehículos perfectos de la desinformación, de la distribución de “noticias falsas” y son el espacio de la polarización ideológica, el insulto y la descalificación.

La mala información siempre es un peligro para la libertad de los ciudadanos, aunque este tema tenga nula relevancia para la mayoría de la sociedad, e incluso haya políticos y ciudadanos partidarios de “acabar con los medios” al que consideran enemigos.

John Kennedy, durante su mandato definió al periodismo como “un arma impagable para la Presidencia, para controlar qué sucede en el gobierno”, mientras que **Thomas Jefferson**, tercer presidente de los EE.UU., aseguró que prefería “periódicos sin Gobierno, antes que un gobierno sin periódicos”. Es cierto que hasta algunos años, la publicidad y las ventas de periódicos generaban buenos ingresos y la radio informativa tenía un muy fuerte respaldo de los anunciantes.

En la tercera década que se inicia del siglo XXI, las reglas de juego del “todo gratis” en digital irá llegando a su fin, y si la gran parte de la humanidad aceptó entregar su privacidad, sus secretos y todos sus movimientos a empresas tecnológicas que ganan millones vendiendo lo que saben de cada persona, no debería ser un problema que cuando desee tener buena información, buenas historias para ver, leer o escuchar en su smartphone, sepa valorarlas y esté dispuesto a pagar el valor de tres tintos al mes.



CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ
@liderazgomr

Liderar es fortalecer con hechos positivos la esperanza de un futuro mejor que el presente.

Marissa Mayer

Porcentajes perversos

El nuevo acto legislativo (05 de 2019), que vuelve a modificar la anterior distribución de las regalías (acto legislativo 05 de 2011 y ley 1530 de 2012), acaba de ser reglamentado. En este momento la norma está en proceso de conciliación. El acto legislativo del 2019 avanza con respecto al de 2011 porque destaca la importancia de la integración regional de los proyectos. Pero este buen propósito se dificulta con la inflexibilidad creadas por los porcentajes y la distinción esquemática entre los tres tipos de asignaciones: directa, inversión local e inversión regional. Los porcentajes fijos de carácter constitucional son perversos, e impiden la discrecionalidad que sería necesaria para definir proyectos estratégicos.

Independientemente de los aspectos coyunturales, los criterios de distribución presentan problemas estructurales, que se desprenden de la falta de visión de largo plazo que ha caracterizado el manejo de las regalías. Este mal no se corrige con el acto legislativo de 2019 y, mucho menos, con la nueva ley.



JORGE IVÁN GONZÁLEZ
Profesor Universidades Nacional y Externado
jorgeivan.gonzalez29@gmail.com

Entre los actos legislativos de 2011 y de 2019 hay cambios sustantivos en la distribución de las regalías. Los hechos más notorios son: i) Un aumento de las asignaciones directas. ii) Un replanteamiento de los fondos de Compensación Regional y de Desarrollo Regional. iii) Y una disminución de los fondos de ahorro y de pensiones. El acto legislativo 05 de 2011 amplió el cubrimiento de las regalías y redujo la participación de las entidades productoras. Se trataba, en el lenguaje del entonces ministro **Echeverry**, de que la “mermelada llegue a toda la tostada”. La reforma de 2019 echó para atrás, y volvió a una distribución en la que se privilegian las necesidades de los municipios productores, como antes del acto legislativo de 2011.

EN ESTE MOMENTO LA NORMA SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE CONCILIACIÓN

Al evaluar los resultados del acto legislativo de 2011, la *Contraloría* de **Maya** mostró que las regalías se dispersaron en más de 12.000 pequeños proyectos, sin ninguna visión estratégica. Y desde su punto de vista, la fragmentación de recursos terminó en una piñata.

El acto legislativo de 2019 hace caso omiso de las recomendaciones de la *Contraloría*, y aunque explicita la importancia de la dimensión regional, no propone mecanismos que eviten la dispersión de recursos. En lugar de crear condiciones propicias para definir proyectos estratégicos, el acto legislativo de 2019 y la ley que se acaba de aprobar, mantienen porcentajes de reparto inamovibles, que fue uno de los grandes errores del acto legislativo de 2011. Es notorio el afán por definir reglas en lugar de dejar abierto el espacio para decisiones discrecionales, en función de prioridades nacionales y territoriales.

Algunos de los gobiernos locales han dicho que la nueva ley reduce la autonomía, y que va en contra de la descentralización. Este tipo de argumento favorece la dispersión de proyectos. En contra de esta lógica, el país debería avanzar en la definición de pocas inversiones estratégicas. Y *Planeación Nacional* tendría que articularlas, de tal manera que las prioridades nacionales intrínsecamente contribuyan al desarrollo regional. En esta mirada de mediano y largo plazo, las regalías se tienen que integrar con los recursos del Sistema General de Participaciones. Nada de esto se consiguió con el acto legislativo de 2019 y, mucho menos, con la nueva ley. ¡Sigue la piñata!

TRIBUNA UNIVERSITARIA

La crisis de la educación superior



CRISTÓBAL SOTO
Estudiante de Derecho

En artículos anteriores he tenido la oportunidad de mencionar las oportunidades que ofrece la virtualidad para mejorar la cobertura de programas de educación superior en todo el territorio nacional; sin embargo, en esta ocasión, quiero reflexionar sobre una realidad que acentuó la pandemia sobre la educación: la inversión de una carrera universitaria no es lo suficientemente rentable con el mercado laboral.

Esta problemática se ha venido presentando hace varios años pero la coyuntura del covid evidenció la gravedad de la situación. Según el observatorio de la universidad colombiana un estudiante en promedio de una universidad privada del país debe pagar semestralmente 15 smlmv (aproximadamente \$13,2 millones de pesos). Es decir, si la carrera tiene una duración de ocho semestres, el valor promedio del pregrado sería de aproximadamente \$105,2 millones, pero si los estudios duran 10 semestres la suma llegaría a casi \$131,5 millones; haciendo la salvedad

que estos valores no reflejan un aumento del valor de la matrícula anual.

Adicional al alto costo de educación superior en Colombia, la oferta laboral de un profesional es insuficiente para recuperar el capital invertido en sus estudios. Por un lado debemos considerar la remuneración promedio de los profesionales en Colombia y por el otro la tasa de desempleo. Respecto al primer punto, según los datos del Observatorio Laboral, un administrador de empresas se gana en promedio \$2 millones al mes, un médico \$3,3 millones y un profesor \$1,5 millones. A pesar de que cada carrera tiene una duración diferente y una remuneración distinta, el tiempo del retorno de la inversión del pregrado en Colombia es de cinco a ocho años.

LA PANDEMIA DEMOSTRÓ QUE LA EDUCACIÓN PUEDE LLEGAR A CADA RINCÓN

Lo anterior es válido siempre y cuando se consiga trabajo. A pesar de que las cifras de desempleo venían disminuyendo en los últimos años, llegando incluso a una tasa de desempleo de 8,9% en 2015, en

julio de este año el *Dane* reportó una tasa de 20,2%. En consecuencia, aquellos profesionales que financiaron un título universitario y que no tienen remuneración alguna se están viendo perjudicados para pagar su deuda.

Para contrarrestar estos efectos, el sector privado, las universidades y el gobierno deberían plantear una política conjunta en donde se reestructuren los precios y la financiaron de los programas conforme a la realidad económica del país; además de procurar modernizar las ofertas de pregrados y adecuar las carreras a las necesidades del mercado laboral para atraer más inversión y aumentar el empleo de calidad.

Para concluir, no pretendo desmotivar a los jóvenes a que inicien sus estudios superiores, por el contrario, creo que la pandemia nos demostró que la educación puede llegar a cada rincón del país, pero también nos enseñó que debemos procurar la modernización del sistema educativo en conjunto al crecimiento empresarial colombiano para que la inversión del estudio sea rentable. En definitiva, debemos entender que la educación, más allá de ser un negocio, es la forma sostenible de progresar como sociedad.